

Maduro-Petro: Un Proyecto Binacional

Por Fernando Mora

El reciente anuncio de una "Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional" entre Colombia y Venezuela ha generado una ola de preocupación entre observadores y críticos por igual. Aunque se presenta como un paso hacia la integración, el proyecto plantea serias dudas sobre la soberanía, la seguridad regional y el creciente enredo de ambos gobiernos con redes criminales transnacionales.

La Narrativa Pública

El presidente colombiano Gustavo Petro defiende la iniciativa como un proyecto de cooperación orientado a mejorar las condiciones de vida de las comunidades fronterizas. Insiste en que no compromete la soberanía nacional, sino que busca restablecer la presencia del Estado en territorios históricamente abandonados. Petro describe la zona binacional como un vehículo de "prosperidad legal", libre de grupos armados ilegales y economías criminales.

En paralelo, el dictador venezolano Nicolás Maduro enmarca el acuerdo como una plataforma para la "paz y el desarrollo integral", afirmando que reemplazará las economías ilícitas por inversión agrícola e industrial. Su zona propuesta incluye los estados venezolanos Táchira y Zulia, y los departamentos colombianos Norte de Santander, Cesar y La Guajira—regiones largamente golpeadas por la violencia y el desgobierno.

El memorando de entendimiento, con una duración de cinco años y renovación automática, establece cooperación en sectores como comercio, infraestructura, salud, educación, turismo y seguridad. También propone operaciones conjuntas policiales y militares para combatir los grupos armados en la frontera.

La Realidad: Control Criminal

A pesar de la retórica, la frontera entre Colombia y Venezuela permanece bajo el control *de facto* de estructuras criminales. Del lado venezolano, esto incluye al Cartel de los Soles y al Ejército Bolivariano, ambos operando con el pleno respaldo de Maduro. Estos grupos colaboran con una variedad de actores armados ilegales, incluidos el ELN, disidencias de las FARC, El Tren

de Aragua, Segunda Marquetalia, Hezbolá, Hamás y otras organizaciones criminales transnacionales. En Colombia, la política de *Paz Total* de Petro ha conducido a un reparto de poder con estos mismos grupos.

La alianza Maduro-Petro califica deliberadamente a estos grupos como "paramilitares" para ocultar sus profundos vínculos ideológicos y operacionales. Estas estructuras funcionan como herramientas de control y represión, socavando directamente la soberanía colombiana y el estado de derecho.

Juntos, Maduro y Petro han facilitado la creación de un corredor criminal a lo largo de la frontera—uno que permite el tráfico de armas y drogas, la trata de personas, la minería ilegal, el secuestro y otras actividades ilícitas.

Una Historia de Alianza

La relación Petro-Maduro es de larga data y está bien documentada. Comenzó con la visita de Hugo Chávez a Colombia en 1994, organizada por el propio Petro, y se fortaleció a medida que Chávez ascendía al poder—presuntamente con respaldo financiero de las FARC. Como presidente, Chávez apoyó abiertamente a Petro y afirmó haberlo respaldado económicamente desde su tiempo en la guerrilla del M-19. Nicolás Maduro posteriormente confirmó dicho apoyo.

La Revolución Bolivariana de Chávez, lanzada en 1999, sentó las bases de un régimen cada vez más autoritario. Su sucesor, Maduro, obtuvo un tercer mandato ampliamente desacreditado en 2024, en medio de fraude generalizado y condena internacional. Aun así, Petro continúa legitimando el gobierno de Maduro—enviando un embajador colombiano a su ilegal toma de posesión en 2025.

Convergencia Ideológica y Operativa

Petro comparte la agenda ideológica de extrema izquierda de Maduro. Su iniciativa de *Paz Total* ha otorgado legitimidad política y control territorial a grupos criminales alineados con el régimen venezolano. Estos actores, incluidos el ELN, la segunda Marquetalia, Hezbolá, Hamás, ahora tienen presencia en Colombia bajo el disfraz de la "paz".

Los vínculos de Petro con potencias extranjeras como Irán, Turquía, Rusia y China—todos aliados de

Maduro-han encendido alarmas sobre una posible injerencia en los asuntos internos de Colombia. Críticos sostienen que su gobierno utiliza los acuerdos de paz como cobertura política para empoderar a grupos criminales y reprimir la disidencia.

Informes indican que hasta un 75% del territorio colombiano está bajo la influencia de estos actores armados, muchos de los cuales son aliados políticos de Petro. Esto ha comprometido gravemente la seguridad nacional y debilitado las instituciones del Estado.

Guerra Digital y Desestabilización Política
Desde 2019, Venezuela se ha convertido en un centro de propaganda digital y campañas de desinformación dirigidas a desestabilizar Colombia. Durante las protestas de 2021, menos del 1% de los usuarios-en su mayoría bots ubicados en Venezuela-generaron cerca del 30% del contenido en línea relacionado con las manifestaciones. Estas campañas incluyeron cuentas falsas, instrucciones por SMS para violencia coordinada y noticias fabricadas sobre abusos militares-todo con el fin de avanzar la agenda política de Petro.

La coalición política de Petro-Colombia Humana, Alianza Verde y otros-había mantenido operaciones en Caracas bajo el aparato de propaganda digital de Maduro. Exalcaldes de Bogotá, Medellín y Cali han sido acusados de malversar recursos públicos para apoyar estas actividades, incluyendo presunto financiamiento a grupos de protesta violenta como la Primera Línea.

Fondos No Declarados y Viajes Sospechosos
La administración de Petro ha estado plagada de escándalos. Uno involucra a Laura Sarabia, su exjefa de gabinete, quien presuntamente manejó de forma indebida más de \$7,000 durante un viaje a Caracas. Persiste la sospecha de que se realizaron transferencias en efectivo mayores y no documentadas. Otra controversia rodea más de 900 viajes no registrados a Cuba y Venezuela por

parte de funcionarios colombianos, a menudo sin presupuestos claros ni objetivos definidos.

Estos viajes sin registrar, combinados con delegaciones políticas que elogian a Maduro, sugieren un vínculo político y financiero más profundo entre el gobierno de Petro y el régimen venezolano.

Represión y Miedo

Hoy en día, la administración de Petro es descrita como la más corrupta y violenta de la historia moderna de Colombia. Periodistas, funcionarios públicos, jueces, mujeres, personas LGBTQ+ y sindicalistas denuncian cada vez más ser blanco de vigilancia, intimidación y persecución. Se acusa a la coalición política de Petro, el Pacto Histórico, de utilizar amenazas y violencia como herramientas para reprimir a la oposición y retrasar las elecciones de 2026.

El llamado “ejército de bots” de Maduro juega un papel clave en moldear la percepción pública, silenciar las voces disidentes y amplificar las narrativas del gobierno-mientras Petro y la vicepresidenta Francia Márquez repiten con frecuencia el lenguaje y la ideología de Maduro.

El Verdadero Objetivo

Debajo de la fachada de “paz y desarrollo”, la zona binacional Maduro-Petro cumple un propósito más cínico: consolidar el poder, asegurar financiamiento continuo de organizaciones criminales y legitimar a grupos armados ilegales. Con el respaldo de regímenes extranjeros, estos actores ahora ejercen control sobre las zonas fronterizas de ambas naciones.

Esto no es un proyecto de integración-es el afianzamiento de una alianza criminal y autoritaria transnacional, disfrazada de diplomacia. Las consecuencias para la estabilidad regional, la integridad democrática y los derechos humanos son profundas.

Bogotá, Colombia, 22 de agosto de 2025.